



Asamblea General Consejo de Seguridad

Distr. general
19 de marzo de 2003
Español
Original: francés

Asamblea General
Quincuagésimo séptimo período de sesiones
Tema 109 del programa
Cuestiones relativas a los derechos humanos

Consejo de Seguridad
Quincuagésimo octavo año

Carta de fecha 5 de marzo de 2003 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Côte d'Ivoire ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de adjuntar a la presente las observaciones del Gobierno de Côte d'Ivoire (véase el anexo) relativas al informe de la Misión urgente de derechos humanos de las Naciones Unidas a Côte d'Ivoire, publicado el 24 de enero de 2003 con la signatura S/2003/90.

Le agradecería que tuviera a bien distribuir el texto íntegro de la presente como documento de la Asamblea General en relación con el tema 109 del programa y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Noël-Emmanuel **Ahipeaud Guebo**
Encargado de Negocios interino



**Anexo de la carta de fecha 5 de marzo de 2003 dirigida al
Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la
Misión Permanente de Côte d'Ivoire ante las Naciones Unidas**

**Observaciones del Gobierno de Côte d'Ivoire acerca del informe
de la Misión de determinación de los hechos sobre la situación de
los derechos humanos en Côte d'Ivoire llevada a cabo por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos con fecha 29 de diciembre de 2002**

Introducción

El sueño de los ciudadanos de Côte d'Ivoire de recobrar la serenidad y la felicidad después de dos años de vida tumultuosa se tornó de pronto en pesadilla en la noche del 18 al 19 de septiembre de 2002. Una violencia inaudita y sin precedentes acababa de irrumpir en su historia, una violencia aún más dolorosa teniendo en cuenta que nada hacía presagiarla al día siguiente de la formación de uno de los gobiernos más consensuados de la historia de Côte d'Ivoire.

Desde entonces, la guerra se ha instalado en el país con todo su séquito de desgracias. En tiempo de paz, los derechos humanos deben vigilarse de manera permanente a causa de las pasiones de los hombres, con frecuencia inclinados a abusar de su poder o de su fuerza. En tiempo de guerra, incluso los más virtuosos pueden llevarse la sorpresa de ver cómo crece en ellos la violencia bajo los efectos conjuntos del instinto de conservación y de provocaciones y acosos de toda suerte, en particular en forma de propaganda mediática machacona y parcial.

Las épocas de crisis deben ser, además, épocas de superación y valor para no perder ninguna oportunidad de salir adelante. Desde el comienzo de esta guerra, el Gobierno y los ciudadanos de Côte d'Ivoire se han empeñado en esta superación, con el respeto de los derechos humanos como piedra angular.

Enseguida se adoptaron numerosas medidas que se han detallado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Côte d'Ivoire se abrió a todas las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos que deseaban investigar la situación de esos derechos.

Preocupado por la transparencia, el 5 de noviembre de 2002, el Gobierno de Côte d'Ivoire recurrió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para pedirle que enviara una comisión de investigación.

A fecha de hoy, esta petición, que se inscribía en un entorno mediático internacional hostil (muchos ciudadanos de Côte d'Ivoire desengañados han llegado a hablar de conspiración internacional multiforme contra su país), todavía no ha tenido respuesta. Esta actitud contrasta con la prontitud con que las Naciones Unidas han respondido a la petición del envío de una misión por parte del gobierno de otro país distinto de Côte d'Ivoire. De haberse respondido a la petición de Côte d'Ivoire, podría haberse evitado la falta de preparación que la propia Misión reconoce (véanse los párrafos 1, 2, 3 y 5 del informe). A pesar de todo, el pueblo de Côte d'Ivoire tenía muchas esperanzas puestas en esta Misión.

Por desgracia, las esperanzas que esta nueva opción abría se vieron frustradas.

La guerra constituye, en sí misma, una violación de los derechos humanos. No es, pues, el marco ideal para el ejercicio de estos derechos. De todos modos, el Gobierno sería incapaz de encubrir las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en las zonas que controla y, cueste lo que cueste, ha decidido emprender el camino de la verdad. Sin embargo, observa con tristeza que la Misión de determinación de los hechos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha optado por este mismo camino.

La lectura del informe revela la ambigüedad de la naturaleza de la Misión (I) y refleja falta de rigor (II) y parcialidad en sus redactores (III).

I. Ambigüedades sobre la naturaleza de la Misión

El 5 de noviembre de 2002, el Gobierno de la República de Côte d'Ivoire pidió a través del Ministro de Derechos Humanos que se enviara una Misión de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Côte d'Ivoire.

Con ocasión del encuentro celebrado el viernes 20 de diciembre de 2002 con el Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos en Ginebra, en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministro de Derechos Humanos reiteró esta misma petición. El Secretario General pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que enviara una Misión para recoger información precisa sobre las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Côte d'Ivoire. La Misión permaneció en el país del 23 al 29 de diciembre de 2002.

La misión fue calificada de Misión de determinación de los hechos.

Determinar hechos presupone darles una cierta veracidad, lo cual implica poner de relieve algunas responsabilidades. Según el párrafo 7 del informe, el objetivo de la Misión no era “acusar a nadie”, sino más bien “reunir información que pudiera ayudar al Consejo de Seguridad a entender lo que pasaba sobre el terreno y contribuir a la búsqueda de la paz”. De acuerdo, pero ¿de verdad se pueden determinar los hechos sin acusar a nadie? ¿Se pueden determinar los hechos sin imputar responsabilidades? Esta ambigüedad en la noción de la Misión de determinación de los hechos es lo que explica que, a modo de exposición del método de trabajo, el informe presente más bien elementos de metodología. Esta ambigüedad es también la que permite comprender que, en definitiva, la Misión haya terminado haciendo precisamente lo que pretendía evitar. Por ejemplo:

- En el párrafo 13, tras citar una decisión de la Corte Suprema de Côte d'Ivoire, el informe concluye que esta decisión tuvo como consecuencia la exclusión de gran parte de la población del país. Esta conclusión constituye un claro juicio de valor, cuando la Misión debía limitarse a presentar los hechos. Después de todo, ¿en qué medida puede una decisión de una jurisdicción sobre la elegibilidad de los candidatos a la presidencia de la República conducir a la exclusión de parte de la población? Invitamos a la Misión a que nos explique esta alusión.
- En el párrafo 12, el informe indica que se vincularon “la ciudadanía, la nacionalidad y el derecho de ser elegido para un alto cargo”. ¿De dónde extrae la Misión esta aserción a modo de conclusión? ¿Acaso esta clase de afirmaciones forma parte de sus objetivos?

- La Misión recogió varios testimonios.

Sin embargo, es evidente que ha hecho caso omiso de los cientos de testimonios que le envió el Ministro de Derechos Humanos, tanto a Abidján como a Ginebra.

Una de dos: o la Misión que se empeña en subrayar que no es una comisión de investigación no recoge testimonios o, si lo hace, la justicia más elemental debería dictarle que tiene que tomar en consideración todos los testimonios disponibles.

- En el párrafo 57, la Misión afirma haber “recogido informaciones en que se puntualiza que los escuadrones de la muerte están integrados por elementos próximos al Gobierno, la guardia presidencial y una milicia tribal de la etnia del Presidente” e incluso declara que “se han mencionado algunos nombres”.

II. Falta de rigor

La falta de rigor se observa en las imprecisiones, la ligereza en el análisis de los hechos y en una serie de inexactitudes.

A. Imprecisiones

Son numerosas y dañan la credibilidad de la Misión. Estas imprecisiones afectan tanto a las fuentes como a los hechos.

1. En cuanto a las fuentes

En varias ocasiones se hace referencia a información facilitada por “una organización de derechos humanos” sin indicar su nombre (párrafos 84, 89 y 153) y, en cambio, se cita con frecuencia a Amnistía Internacional.

Este modo de proceder plantea los siguientes interrogantes:

- ¿La Misión duda de la fiabilidad de los hechos, por otra parte graves, que estas organizaciones denuncian?
- ¿Está sugiriendo la Misión que estas organizaciones son poco creíbles, habida cuenta de su probada afiliación a determinados partidos políticos?
- En fin, ¿existen estas organizaciones realmente?

Estos interrogantes están todavía más justificados si se tiene en cuenta que el Ministerio de Derechos Humanos tiene contabilizadas más de una treintena de asociaciones de defensa de los derechos humanos con las cuales trabaja en abierta colaboración.

2. En cuanto a los hechos que se aducen

Por ejemplo, en el párrafo 51, se menciona a tres inmigrantes originarios de Burkina Faso (Yabre Sebré, Masse Haïdou y Masse Ali) que, presuntamente, fueron ejecutados; sin embargo, no se da ninguna información sobre las circunstancias en que fueron muertos. ¿Se trata de combatientes del MPCÍ? ¿Por qué murieron precisamente ellos? ¿Los ciudadanos de Burkina Faso son víctimas de ejecuciones sistemáticas en Côte d’Ivoire? ¿Acaso se ha dejado influir la Misión por el mito del sentimiento contrario a Burkina Faso existente en los habitantes de Côte d’Ivoire, como

se establece en un memorando* que el Gobierno de aquel país ha difundido ampliamente en los círculos diplomáticos?

B. Ligereza en el análisis de los hechos

Debido a la falta de rigor en el análisis de la información recibida, la Misión se ha limitado a hacer afirmaciones gratuitas y a extraer conclusiones apresuradas.

1. Numerosas afirmaciones gratuitas

La Misión ha hecho afirmaciones gratuitas sin aportar la más mínima prueba, ni siquiera indicios de ellas.

Así:

- En los párrafos 98 y 99, la Misión menciona actos que incitan al odio y a la xenofobia, actos contra la población del norte cometidos por “algunos sectores de la población de Côte d’Ivoire” y mensajes de incitación al odio étnico presuntamente transmitidos por la radio y la televisión nacionales. Todos estos hechos se mencionan sin citar ni un solo ejemplo, ni una sola fuente.
- En el párrafo 94, la Misión afirma de manera perentoria la existencia de centros de detención y tortura en la zona controlada por el Gobierno y menciona las casernas y las academias de la gendarmería y la policía como posibles escenarios. ¿De dónde deduce la Misión que estos lugares pueden utilizarse como lugares de detención y tortura? La Misión, que no ha acudido a los lugares para verificar los hechos, ha faltado a su deber de investigación.
- En el párrafo 111, la Misión señala que los militantes de la Alianza de los Republicanos y la Unión Democrática y Popular de Côte d’Ivoire (sic)** serían objeto de amenazas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de opinión y que varios habrían sido secuestrados y ejecutados; sin embargo, no aporta ningún hecho que justifique estas afirmaciones.
- En el párrafo 118, la Misión afirma disponer de información suministrada por defensores de los derechos humanos, cuyo nombre no menciona, sobre casos de robos, actos de violencia y saqueos perpetrados por las fuerzas del orden contra los habitantes de barrios de viviendas precarias.

Por más que haya visitado el lugar de los hechos, según afirma, la Misión no se tomó la molestia para corroborar esos actos, de recabar información entre los habitantes con los que, sin embargo, afirma haberse encontrado en diciembre de 2002, en lugares destruidos desde el 20 de septiembre de 2002.

Todos los hechos que se citan deberían haberse comprobado con las autoridades gubernamentales. Al no hacerlo, la Misión ha faltado a sus obligaciones en el análisis de los hechos, por lo que no ha podido evaluar con rigor la información recibida.

* El Gobierno de Côte d’Ivoire respondió a este memorando. En el Ministerio de Derechos Humanos y en las representaciones diplomáticas de Côte d’Ivoire se puede consultar dicha respuesta.

** Véanse las observaciones que figuran a continuación.

2. Falta de rigor en la evaluación de la información recibida

En la evaluación de la información recibida, la Misión (aunque pretende no ser una Misión de investigación a pesar de comportarse como tal) ha hecho caso omiso de la regla de oro de todo investigador, que debe escuchar a todos los que tienen algo que decir y tener en cuenta su versión de los hechos para aportar las informaciones y contrainformaciones necesarias y de este modo comprobar la exactitud de los hechos.

Hay varios ejemplos que corroboran esta afirmación.

- En el párrafo 84, la Misión recoge las declaraciones de una organización de derechos humanos que había calculado que el número de personas detenidas por los agentes del orden del Gobierno ascendía a 150. Sin embargo, la Misión no comprobó esta información con las autoridades gubernamentales antes de publicarla.

Además, en relación con el número de detenidos por los rebeldes, la Misión afirma que “sin embargo, se cree que detuvieron a once miembros de la Gendarmería”.

La utilización del verbo “creer” hace pensar que no realizó ninguna comprobación y que la Misión no está segura de lo que expone. Ahora bien, nosotros sabemos que, después de la ocupación de ciudades y, en particular, de Bouaké, los rebeldes detuvieron a varias decenas de gendarmes y agentes del orden no beligerantes, así como a miembros de sus familias.

- En el párrafo 85, la Misión ha podido confirmar el encarcelamiento del Sargento Alain Guéi; en cambio, no ha podido hacer lo propio en el caso de las cinco personas que, según ella, se hallan detenidas en la Dirección de Vigilancia del Territorio.

Sin embargo, este departamento de la Policía se encuentra en Abidján, ciudad que visitó la Misión. Por otra parte, la Misión tampoco proporciona la fuente de estas informaciones sobre las supuestas detenciones.

- En el párrafo 87, la Misión afirma que “después de la llegada de las tropas francesas no se habían ordenado ejecuciones sumarias de gendarmes en Bouaké”. Esta información nos deja perplejos. ¿Cómo pueden los soldados franceses llevar a cabo este control cuando sabemos que se apostaban en las distintas líneas de frente y a la salida de la ciudad de Bouaké en el corredor este, sobre el eje Bouaké-M'Bahiakro, y en la Escuela Baptista, y no en el interior de la ciudad de Bouaké, y mucho menos en las distintas bases de los rebeldes?

El informe indica también que el Movimiento Patriótico de Côte d'Ivoire (MPCI) detiene prisioneros, pero no precisa cuántos. Ahora bien, la Misión debía haber insistido a los rebeldes para visitarlos y determinar sus condiciones de detención.

- En el párrafo 114, la Misión menciona que, al parecer, varios representantes de partidos políticos insistieron en que “personas que habían criticado abiertamente al poder establecido habían sido asesinadas”.

Éste es el ejemplo más característico de la falta de rigor en la evaluación de la información recibida por la Misión.

En efecto, el término “las personas” empleado en el informe indica claramente que en Côte d’Ivoire ha dejado de haber oposición, cuando en realidad son numerosos los ejemplos de libre expresión de las opiniones y las ideas que se manifiestan de diversas formas, como en la publicación diaria de periódicos con líneas editoriales que, en ocasiones, son diametralmente opuestas. La libertad de opinión es tal que incluso ha habido ministros del Gobierno que han dimitido, sin que por ello hayan sido asesinados.

Una vez más, la Misión se ha quedado a medio camino en sus investigaciones.

- En el párrafo 122, el tiempo condicional utilizado por la Misión en su informe original en francés deja en el aire una duda sobre la materialidad de los hechos cometidos por los dos movimientos rebeldes del oeste (el MPIGO y el MJP), cuando es un hecho claramente establecido que los combatientes de estos dos movimientos cometen sistemáticamente saqueos, destruyen viviendas y masacran a la población. Estos hechos están confirmados no sólo por los desplazamientos desde esta región, sino también por las cadenas de radio y televisión nacionales e incluso extranjeras.
- En el párrafo 124, la Misión afirma haber recibido una información de las fuerzas armadas nacionales, proveniente del diputado Bloléquin, que denunció casos de saqueo y profanación de cementerios en esta localidad. A pesar de que el diputado Bloléquin citó a las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d’Ivoire como fuente de esta información, la Misión no consideró útil ponerse en contacto con ellas para enterarse de más.
- En el párrafo 134, la Misión afirma que “no se ha presentado información concreta sobre personas acusadas o procesadas, aunque la Misión recibió garantías al más alto nivel de que se estaban examinando algunos casos”. Esto demuestra una vez más que no se ha llevado a cabo ninguna investigación para determinar los hechos.

De hecho, la Misión debería haber acudido a las salas de instrucción del Tribunal Militar o de los Tribunales de Primera Instancia ubicados en Abidján, como hizo en Daloa, para comprobar la existencia de estos procesos y la fase en que se hallaban. Además, debería haber visitado los diferentes centros penitenciarios y correccionales para comprobar si, en efecto, las personas se encontraban allí detenidas.

C. Las inexactitudes

El informe en general consigna varios hechos y elementos inexactos. Los ejemplos al respecto son numerosos; se mencionarán algunos que dan lugar a dudas sobre la seriedad de la labor de la Misión.

- En el párrafo 4 la Misión afirma que se reunió con varios miembros del Gobierno y que el Ministro de Derechos Humanos estuvo representado por el Ministro de Comercio. Más allá de la ambigüedad de la palabra “reunió” que no establece que se trató de una reunión de trabajo, el Gobierno desea precisar que, cuando la Misión de las Naciones Unidas visitó Abidján, el Ministro de

Derechos Humanos fue representado por el Ministro Achi Patrick, Ministro de Infraestructura Económica, portavoz del Gobierno.

Además, el Gobierno de Côte d'Ivoire tiene dos ministerios de comercio:

- El llamado Ministerio de Comercio Interior, a cargo de la Sra. Odette Sauyet Likikouet, Diputada de Diégonéfla, integrante del Frente Popular de Côte d'Ivoire.
- El llamado Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por el Sr. Amadou Soumahoro, Alcalde de Séguéla, integrante del Partido Alianza de los Republicanos.

Para finalizar, el Gobierno subraya que ante la ausencia de la Ministra de Derechos Humanos, su Director de Gabinete trató en vano de celebrar una sesión de trabajo con la “Misión de determinación de los hechos” de las Naciones Unidas.

- En el párrafo 55 la Misión anuncia que antes de su asesinato el Dr. Dacoury Tabley había estado detenido durante dos días por las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire a fines de investigación. ¿Dónde obtuvo la Misión esa información que es inexacta? Si se hubiera tomado la molestia de leer los anexos del documento que le envió el Ministerio de Derechos Humanos, habría entendido que no estaba demostrado que el Dr. Dacoury Tabley hubiese estado detenido por las fuerzas de seguridad, de lo que no hay constancia en el acta literal No. 942 de 11 de septiembre de 2002 de la sección de investigaciones de la brigada de gendarmería de Abidján.
- En el párrafo 27 del informe se señala que hay 60.000 refugiados que están en las zonas de acogida del norte del país, hacia la frontera con Liberia. ¿De qué zona del norte del país se trata? La inexactitud de esa mención es obvia porque la frontera con Liberia no se encuentra al norte de Côte d'Ivoire, sino al sudoeste.

Además, en el informe se sugiere que Korhogo, la aldea más grande del norte del país, no forma parte de la región septentrional de Côte d'Ivoire, ya que se mencionó que del total de 72.000 refugiados registrados en Côte d'Ivoire, 60.000 estarían instalados en el norte del país en tanto 12.000 lo estarían en Abidján, Man, Bouaké y Korhogo.

Para finalizar, ¿se puede decir que después de la partida de 32.000 refugiados liberianos de Côte d'Ivoire de los 72.000 registrados, aún quedan 60.000 en ese país que el ACNUR desearía trasladar al sur?

- En el párrafo 111 la Misión afirma haberse reunido con “representantes de las formaciones políticas en Côte d'Ivoire, en particular, ... la Unión Democrática y Popular de Côte d'Ivoire”. Conviene señalar que el nombre exacto del partido del difunto General Robert Gueï (al que se refiere sin dudas el informe), es Unión por la Democracia y la Paz en Côte d'Ivoire. Teniendo en cuenta ese error (?), legítimamente nos preguntamos si la Misión se reunió efectivamente con los miembros de ese partido, sobre todo que ese error (?) se reitera numerosas veces en el informe (dos en el párrafo 111 y dos en el párrafo 112).
- En el párrafo 133 del informe se da a entender que el Ministerio de Derechos Humanos fue creado después de que comenzara el conflicto. En realidad, ese ministerio es producto de la reorganización ministerial del 5 de agosto de

2002. Además, el respeto por los derechos humanos siempre fue una preocupación del Gobierno que, antes del 5 de agosto de 2002, había creado una dirección de derechos humanos en el Ministerio de Justicia, Libertades Públicas y Derechos Humanos.

- Según el párrafo 137 el expediente sobre la masacre de Yopougon de octubre de 2000 no había sido objeto de seguimiento. Esa idea es inexacta y carece de todo fundamento.

En efecto, tras el informe de las Naciones Unidas en el que se señalaba a los gendarmes como presuntos autores de esos actos y se inició y tramitó un procedimiento judicial en su contra, tras el cual fueron absueltos porque no se pudo probar su culpabilidad.

Es preciso subrayar que los testigos convocados para el proceso y que podrían haber permitido al tribunal formarse una opinión se negaron a comparecer. No se puede hablar de impunidad en ese caso. Además, el Jefe de Estado pidió la reapertura de esa causa. Con ese fin, se crearon tres nuevas salas de instrucción en el Tribunal de Primera Instancia de Abidján para reiniciar los procedimientos (salas de instrucción octava, novena y décima).

- En el párrafo 145 del informe se da a entender que parte de la población de Côte d'Ivoire no recibe protección y que existe discriminación por razones de origen nacional. Esto no refleja para nada la realidad y resulta tendencioso en la medida en que todos los ciudadanos de Côte d'Ivoire son iguales ante la ley. Ese principio se afirma además en la Constitución en su artículo 2, según el cual "Todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley".

Todas esas inexactitudes revelan la parcialidad del informe.

III. La parcialidad de la Misión

Durante la visita de la Ministra de Derechos Humanos a Ginebra, los días 19 y 20 de diciembre de 2002, se prometió realizar una Misión imparcial de conformidad con las normas de las Naciones Unidas. Sin embargo, es preciso reconocer que los resultados no están a la altura de las promesas realizadas. La parcialidad de la Misión se puede observar en diversas partes del informe.

A. Expresiones y términos faltos de imparcialidad

- En el párrafo 8 se habla de "el Gobierno y sus partidarios", el primero de los cuales sería el MPC. ¿Esto quiere decir que el conflicto afecta solamente al Gobierno y sus partidarios, y que no afecta a todos los habitantes de Côte d'Ivoire cuyo país es atacado?

Côte d'Ivoire es la agredida.

Hablar del Gobierno y de sus partidarios da crédito a la tesis de un gobierno ilegítimo que lucha con sus partidarios irreductibles contra los que quieren liberar a Côte d'Ivoire. ¿Es preciso recordar a la Misión que todos los partidos políticos de Côte d'Ivoire condenaron al agresor? ¿Son ellos los partidarios de quienes están en el poder?

- En el párrafo 48 se utiliza la palabra motín para hablar de la rebelión. ¿Se puede creer seriamente que lo ocurrido el 19 de septiembre de 2002 fue un motín?

El motín es la acción de amotinarse. Amotinarse es negarse colectivamente y expresamente a someterse a las órdenes de la autoridad a que se está subordinado.

¿Planificar el asesinato y matar fríamente al Ministro de la República y a otras altas autoridades civiles y militares, es negarse a someterse a sus órdenes?

¿Violar mujeres tiene algo que ver con la disciplina militar?

¿Los desertores que dirigen la rebelión son miembros de las fuerzas legítimas de Côte d'Ivoire?

Los mercenarios del MPCÍ-MPGO-MJP que se encuentran en Bouaké y al oeste del país ¿forman parte de las fuerzas armadas de Côte d'Ivoire?

Hablar aquí de motín es tomar partido acerca del origen del conflicto y por lo tanto, tratar de hacer más aceptable la agresión contra los habitantes de Côte d'Ivoire.

Por más que la rebelión del MPCÍ y de sus antiguos miembros (el MPIGO y el MJP), se pueda calificar de violación grave de los derechos humanos, la Misión utiliza una redacción lacónica y títulos anodinos. Ello logra rápidamente sus objetivos en una sociedad cibernética que va de prisa y en la cual los lectores no siempre se toman el tiempo de meditar las frases sino que a veces leen simplemente entrelíneas.

Así, cuando la Misión opta por el término “escuadrones de la muerte” (expresión que desde un principio sorprende al lector), porque se le atribuye al Gobierno, prefiere hablar de “tratamiento de niños” para referirse al reclutamiento de los niños soldados por los rebeldes.

Reconozcamos que el título “niños soldados” habría sido mucho más expresivo.

B. Acerca de las causas del conflicto

1. Acerca de las causas del conflicto expuestas por la Misión

El informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala cuatro causas fundamentales de la crisis que sufre en la actualidad Côte d'Ivoire.

La Misión cita sucesivamente las siguientes cuestiones:

- La identidad nacional.
- El concepto de “ivoirité”.
- La tenencia de tierras.
- La Constitución.

Pero al analizar estas causas vemos, por una parte que no hay que suponer que justifiquen la crisis por principio y, por la otra, que su contenido carece de fundamento sólido.

Por lo que respecta a las tres primeras causas, las críticas están relacionadas con las estrictas condiciones para adquirir la nacionalidad de Côte d'Ivoire por los no nacionales y la negativa a acordar la plena propiedad a los extranjeros sobre las tierras rurales. Puesto que la crisis es presuntamente interna ("ivoiro-ivoirienne"), no es válido tener presente y admitir como justificante la cuestión de los extranjeros.

La Constitución, por su parte, y en particular las exclusiones contempladas en el artículo 35, fue aprobada en un referéndum convocado por todos los partidos políticos, sin excepción alguna.

Por ello, no hay que pensar que la Constitución define el pueblo de Côte d'Ivoire, sino que emana de él.

No es admisible que se ponga en tela de juicio esta Constitución por motivos políticos puramente especulativos y se cite como una de las causas del conflicto que asola actualmente Côte d'Ivoire.

Las distintas causas únicamente pueden aducirse en el informe si se acepta que el conflicto es en realidad de origen extranjero.

Pero, por desgracia, la Misión no ha explorado esta vía, incluso ahora que ya no cabe duda, vistos los medios que utilizan y la logística de los rebeldes, de que la crisis tiene también, predominantemente, un origen extranjero que, en virtud de los instrumentos internacionales, es preciso condenar.

Una vez hechas estas observaciones preliminares, es importante profundizar en el examen de estas causas, para comprobar que no pueden admitirse realmente como justificantes del actual conflicto.

a) La cuestión de la nacionalidad

La nacionalidad de Côte d'Ivoire se rige por la Ley No. 61-415 de 14 de diciembre de 1961, enmendada en 1972, y se define como la pertenencia a la población que constituye un Estado.

La crítica que se hace al código de nacionalidad es que las condiciones de elegibilidad establecidas en 1972 son demasiado rigurosas, en el sentido de que, a partir de esa fecha, se eliminó por completo la posibilidad de adquirir la nacionalidad de Côte d'Ivoire en virtud de la declaración prevista en los artículos 17 a 23 de dicho código.

Incluso en virtud de dicha legislación, si un no nacional presentaba una declaración, el Estado de Côte d'Ivoire tenía potestad para aceptarla o rechazarla con arreglo al mencionado artículo 23.

Se trata de una manifestación de la soberanía del Estado de elegir a los no nacionales que deseen adquirir la nacionalidad del país.

De hecho, en la actualidad el derecho internacional incluye por principio, las cuestiones de nacionalidad en el ámbito de competencia reservado a los Estados. Cada uno puede establecer libremente las condiciones para conceder su nacionalidad y ningún otro puede hacerlo en su lugar¹.

¹ Bernard Audit "Droit Internationale Privé" (Derecho Privado Internacional), económica, 1991, pág. 726.

La competencia exclusiva del Estado y su libertad absoluta para determinar sus reglas de nacionalidad han quedado consagradas en la jurisprudencia internacional, concretamente en la opinión consultiva de 7 de febrero de 1923 (serie B, 4) del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, reafirmada por la Corte Internacional de Justicia el 6 de abril de 1955 en el caso *Nottebohm*.

Mediante la reforma de 1972, Côte d'Ivoire estableció libremente condiciones únicas e igualitarias para adquirir la nacionalidad de ese país. Estas condiciones no han suscitado jamás rencores ni han sido impugnadas por no nacionales residentes en Côte d'Ivoire.

Se trata de una utilización política simplista de la cuestión de la nacionalidad, que no puede aceptarse como causa de la actual crisis.

El párrafo 11, que carece completamente de contexto y continuidad ideológica, contiene asociaciones peligrosas. La Misión ha recogido tesis inventadas por los autores de la rebelión para justificar sus actividades.

El presente documento tiene por objeto demostrar la importancia de la identidad nacional en la crisis que sufre en la actualidad Côte d'Ivoire. En este sentido, los autores del informe acusan a la ley de 1972, relativa al código de la nacionalidad, de causa de una verdadera frustración sufrida por las familias de migrantes.

En este caso, cabe preguntarse por qué los efectos de la ley de 1972 no se hicieron sentir 15 años antes. Pero quizás habría que aducir otra teoría, la de que ciertos políticos han tratado de aumentar su audiencia política explotando hábilmente los acontecimientos históricos y colocando en el punto de mira político a migrantes que, en un principio, nunca habían tenido intención de ejercer derechos de ciudadanía de ningún tipo en Côte d'Ivoire².

b) El concepto de “ivoirité”

La Misión esgrime este argumento como una de las principales causas de la crisis de Côte d'Ivoire.

Sin embargo, el informe no define este concepto, que se califica de controvertido.

“Ivoirité” es un concepto que no existe ni en la legislación de Côte d'Ivoire ni en el programa del actual Gobierno.

Si nos ajustamos a la definición del autor del concepto, el Presidente Henri Konan Bedie, la “ivoirité” es una promesa para todos, incluso los extranjeros, con independencia de su etnia, religión, región o raza.

La “ivoirité” es la cultura que distingue a todos los ciudadanos de Côte d'Ivoire sin excepción, y por ello está totalmente contrapuesta al tribalismo, el etnocentrismo, y el racismo³.

Sin hacernos eco de sus palabras, estas declaraciones del autor del concepto demuestran claramente que no se trata en caso alguno de un medio de exclusión que justifique la crisis.

² En este contexto, una investigación de las comunidades inmigradas de Burkina Faso de Ghana podría poner de manifiesto claras similitudes con la postura de la comunidad inmigrada de Burkina Faso de Côte d'Ivoire.

³ *Racines – Revues Culturelle Africaine* No. 3, junio de 1998, pág. 87.

Por otra parte, en el acuerdo de Linas-Marcoussis de 24 de enero de 2003, no se menciona este concepto como una de las causas del conflicto.

c) El régimen inmobiliario rural

Se aduce que la reforma de la tenencia de tierras en Côte d'Ivoire perjudica a los nacidos en el extranjero. Para analizar el fundamento de esta afirmación conviene tener presente sin embargo la legislación existente antes de la reforma y seguir así su evolución.

1. El derecho positivo antes de la reforma

Las fuentes del régimen de tenencia de tierras antes de la reforma consistían principalmente en los siguientes textos:

- Decreto de 26 de julio de 1932 sobre la reorganización del régimen de tenencia de tierras.
- Decreto No. 64, de 16 de abril de 1964, que prohíbe la firma de registros no notariales para bienes inmuebles.
- Ley No. 70-209, de 20 de marzo de 1970, relativa a la financiación de la administración en 1970.
- Decreto No. 71-74, de 16 de febrero de 1971 sobre los procedimientos de propiedad inmobiliaria.

El contenido del derecho positivo relativo al régimen inmobiliario rural queda recogido en el artículo 2 del decreto No. 71-74, de 16 de febrero de 1991, que establece lo siguiente: *Los derechos al usufructo del suelo que se consideren derechos consuetudinarios corresponden a título personal a quienes los ejercen y no pueden transferirse bajo ningún concepto. Nadie puede reclamar la cesión de dichos derechos en parte alguna del territorio de la República.*

El artículo 1 de ese mismo decreto condiciona la legalidad de la ocupación de un terreno rural a la tenencia de un título de cesión provisional o definitiva expedido por el Ministerio de Agricultura o de una autorización para ocuparlo a título precario o revocable.

De estas disposiciones se desprenden dos consecuencias:

- Sólo la administración pública está habilitada para expedir un título de ocupación. El título de propiedad de las tierras se reclama una vez otorgada la concesión definitiva. El procedimiento prescrito a tal efecto se recoge en el artículo 3 del mencionado decreto y contempla lo siguiente: una solicitud, una investigación administrativa, la concesión de una autorización de ocupación, que va seguida de una concesión provisional, el registro en nombre del Estado y el acta de tasación.

Se desprende de lo que antecede que ninguna autoridad tradicional ni ningún jefe de aldea puede otorgar la propiedad de las tierras a otra persona, aunque sea natural de Côte d'Ivoire.

Es obligatorio que quede constancia en un acta notarial de la transferencia de propiedad y de las principales transacciones que entrañen derechos reales. Este requisito, que tiene por objeto confirmar la validez de la transacción, se recoge en el

artículo 5 del decreto de 16 de febrero de 1971 y en la Ley de Hacienda de 20 de marzo de 1970.

¿Pueden aportarse pruebas concretas de que un extranjero en posesión de un título de propiedad raíz o cesionaria de un derecho real obtenido con arreglo al procedimiento legal ha sido desposeída de tal derecho?

- Las tierras de propiedad consuetudinaria donde se cultivan las plantaciones reivindicadas, que no están registradas, pertenecen por derecho al Estado. Las comunidades aldeanas tienen solamente derecho al usufructo. Como se indica en el artículo 2 del decreto de 16 de febrero de 1971, nadie puede proclamarse cesionario de derechos en todo el territorio de la República.

Toda venta que se haga de estos terrenos es por ello nula, puesto que las tierras pertenecen al Estado.

Los tribunales de Côte d'Ivoire han establecido una jurisprudencia constante en este sentido. Así, la Corte de Apelaciones de Abidján, en un fallo de 5 de noviembre de 1976 (*Revue ivoirienne de droit* No. 1, 2, pág. 50, No. 4) determinó que un acuerdo relativo a una plantación debía quedar anulado y procedía en todos los casos, se tratase de una venta o una prenda, ordenar la restitución de dicha plantación contra reembolso de las sumas abonadas.

La misma Corte de Apelaciones, en fallo de 24 de febrero de 1978 (R.I.D 1982 No. 1-2, pág. 51; No. 91), determinó que las tierras objeto de un derecho de usufructo por los jefes de las comunidades no podrán ser cedidas o arrendadas sin decreto que lo autorice y que, en ausencia de una autorización, el contrato firmado por las partes adolece de nulidad absoluta.

La sala del Tribunal de Adzopé, en un fallo No. 74/86 de 16 de mayo de 1986, decidió que los terrenos rurales no registrados pertenecen al Estado y, a falta del trámite de registro, sus ocupantes solamente ejercen un derecho de usufructo precario que les permite recoger el fruto de su trabajo.

La legislación anterior a la reforma tampoco permitía ni a los ciudadanos de Côte d'Ivoire ni a los extranjeros, adquirir un terreno de propiedad consuetudinaria. Por ello, hay que decir que, incluso bajo el mandato del Presidente Félix Houphouët Boigny, la regla de que la tierra es del que la trabaja nunca formó parte del derecho positivo de Côte d'Ivoire.

2. La situación después de la reforma

La finalidad de la reforma iniciada mediante la Ley No. 98-750 de 23 de diciembre de 1998, que contó con el voto unánime de los diputados antes del golpe de Estado, era mejorar la coherencia de un sistema de textos dispersos, que daba lugar a complicaciones.

Define el régimen inmobiliario rural y determina su composición. El régimen abarca las tierras de propiedad del Estado, las tierras propiedad de comunidades públicas y particulares, las tierras sin dueño y, con carácter provisional, las tierras de propiedad consuetudinaria y las concedidas por el Estado a comunidades públicas o a particulares.

La reforma no elimina el registro como un requisito para el derecho de propiedad. La innovación es que habilita un procedimiento para demostrar la existencia de

derechos consuetudinarios. Esta cuestión ya había sido objeto de controversia entre ciudadanos de Côte d'Ivoire entre los que regían las mismas costumbres.

Los tribunales han experimentado con frecuencia grandes dificultades para resolver cuestiones de propiedad consuetudinaria.

La Ley No. 98-750 de 23 de diciembre de 1998 regula, entre otras, la cesión y transmisión de la propiedad rural.

Como en el caso anterior, el Gobierno está en el centro de las transacciones. Así, con arreglo al artículo 15, el Gobierno traspasa los contratos de concesión de tierras registradas a nombre del Estado previa solicitud expresa de un concesionario y sin que este traspaso pueda redundar en perjuicio de los derechos de terceros. El mismo artículo precisa que las concesiones provisionales no puedan transferirse y prohíbe el subarrendamiento o la cesión directa del contrato por el arrendatario.

Excepto en estos casos, los propietarios de tierras rurales pueden disponer libremente de ellas. De ese modo, pueden firmar contratos con extranjeros o nacionales de Côte d'Ivoire dentro de los límites del artículo 1, que reserva el derecho de nuda propiedad a los nacionales de Côte d'Ivoire, ya sea por nacimiento o por naturalización.

En realidad, el nuevo régimen inmobiliario de Côte d'Ivoire protege a los poseedores extranjeros de buena fe. Ahora cuentan con protección frente a los nacionales poco escrupulosos que les vendían o arrendaban tierras sin ser propietarios o sin ajustarse a los procedimientos legales.

Por otra parte, un estudio comparado de las legislaciones de los países de la CEDEAO, especialmente la de Burkina Faso, demuestra que son idénticas e incluyen una disposición que reserva la propiedad de tierras rurales e incluso urbanas a los nacionales.

Se desprende de lo que antecede que la legislación de tierras en Côte d'Ivoire refleja una cierta continuidad. Esta continuidad está en consonancia con el espíritu africano, no solamente de Côte d'Ivoire, que considera que la tierra debe ser inalienable, porque “pertenece a los antepasados y también a las generaciones venideras, más incluso que a nuestros contemporáneos”⁽¹⁾. Es por ello que los grandes juristas occidentales y africanos consideran que la idea de la propiedad individual de las tierras es contraria al sentimiento profundo de los africanos⁽²⁾ 4.

Ello explica los problemas de propiedad que pueden originarse entre los ciudadanos de Côte d'Ivoire, por ejemplo, entre los abouré y los m'batto del país. El conflicto entre estas dos etnias data de hace varios años.

d) La Constitución

Se critican las exclusiones recogidas en el artículo 35 de la Constitución de Côte d'Ivoire.

⁴ “les grands systèmes de Droits Contemporains” René David y Camille Jauffret-Spinozi-Dalloz, 1992, pág. 449, en David y Jauffret-Spinozi, *op. cit.* pág. 451, M'Baye “Droit et Développement en Afrique Francophone de l'Ouest” en Tunic (A) “les aspects juridiques du développement de l'Economie”, 1966, pág. 212-165.

Por ejemplo, la Misión hace referencia a una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de rechazar la candidatura a la Presidencia de catorce (14) personas.

Una lectura de esta decisión, que la Misión no parece haber hecho, pone claramente de manifiesto que el artículo 35 no es la única causa de que se hayan rechazado las candidaturas. Hay otros motivos, relacionados con el incumplimiento de las formalidades exigidas para postular, que son por las que se rechazaron la mayor parte de estas candidaturas.

De hecho, de las diecinueve candidaturas, doce fueron rechazadas y dos fueron retiradas.

Con respecto a las candidaturas rechazadas:

- **Allasane Ouattara** fue rechazado por:
 - Discrepancias entre los nombres de su madre en el extracto del certificado de nacimiento.
 - Certificado de nacionalidad dudoso.
 - Moralidad dudosa.
 - Haberse valido de otra nacionalidad.
- **Henri Konan Bedie** fue rechazado por:
 - Falta del alta médica.
- **Boa Amoikon Tiemele Edjampan** fue rechazado por:
 - Pago de la fianza fuera de plazo.
- **Bombet Emile Constant** fue rechazado por:
 - Moralidad dudosa.
- **Leka Faustin** fue rechazado por:
 - Falta de pago de la fianza.
- **Gaston Ouassenan Kone** fue eliminado por:
 - Pago de la fianza fuera de plazo.
- **Lanzeni Coulibaly** fue eliminado por:
 - Expediente incompleto.
- **Coulibaly Climadlo** fue eliminado por:
 - No haber dimitido de un cargo público.
- **Lamine Fadiga** fue eliminado por:
 - Moralidad.
- **Dramane Toure** fue eliminado por:
 - Expediente incompleto.

- **Pepe Paul** fue eliminado por:
 - Expediente incompleto.
- **Bamba Morifere** fue eliminado por:
 - No haber dimitido de un cargo público.

Por otra parte, la recomendación No. 8 del párrafo 154 es que: “es necesario hacer todo lo posible para alcanzar un consenso sobre la Constitución, teniendo en cuenta las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos humanos”. Pero, ¿de qué consenso se trata, si la Constitución de Côte d’Ivoire fue aprobada por una mayoría aplastante del 86%. Todos los partidos políticos, incluido el RDR que la impugna, hicieron un llamamiento a votar “Sí”. Jamás se ha impugnado la transparencia de este proceso consultivo.

Además, ¿cuáles son las normas internacionales relativas a los derechos humanos que debe tener en cuenta la Constitución?

La Misión no se pronuncia sobre esta cuestión. No conocemos la existencia de una constitución modelo en el mundo. Cada Estado tiene su propia constitución.

De hecho, detectamos la inquietud de los rebeldes y la Misión ante las condiciones para ser elegido Presidente de la República. En este sentido, cada país establece sus criterios y redacta su constitución en función de sus propias circunstancias. De este modo:

En Argelia

• Artículo 73

Para poder ser elegido Presidente de la República, el candidato debe:

- Tener la nacionalidad argelina de origen;
- Ser de religión musulmana;
- Tener cuarenta años cumplidos el día de la elección;
- No haber sido privado de derechos civiles y políticos;
- Dar fe de la nacionalidad argelina del cónyuge;
- Justificar su participación en la revolución del 1º de noviembre de 1954, en el caso de los candidatos nacidos antes de julio de 1942;
- Justificar la no participación de los padres de los candidatos nacidos después de julio de 1942 en los actos contrarios a la revolución del 1º de noviembre de 1954.

En Benin

• Artículo 44

Nadie puede ser candidato a la Presidencia de la República si no:

- Es de nacionalidad beninesa por nacimiento, o desde al menos diez años;
- Es de moralidad demostrada e integridad intachable;
- Está en posesión de todos sus derechos civiles y políticos;

- Tiene como mínimo cuarenta y como máximo setenta años en la fecha en que presenta su candidatura;
- Reside en el territorio de la República de Benin a la fecha de las elecciones;
- Está en buen estado de salud física y mental, en opinión de un equipo de tres médicos nombrado por la Corte Constitucional.

En Burkina Faso

• Artículo 38

El candidato a la Presidencia de Burkina Faso, debe:

- Ser de Burkina Faso por nacimiento y nacido de padres que también sean naturales de Burkina Faso;
- Tener treinta y cinco años cumplidos en la fecha en que presente su candidatura y reunir las condiciones prescritas por la ley.

En el Gabón

• Artículo 10

Pueden postular a la Presidencia de la República todos los gaboneses de ambos sexos que estén en posesión de todos sus derechos civiles y políticos y:

- Tengan un mínimo de cuarenta y un máximo de setenta años;
- Nadie que haya adquirido la nacionalidad gabonesa puede presentar su candidatura a la Presidencia de la República. Únicamente sus descendientes que hayan residido de forma continua en el Gabón pueden hacerlo a partir de la cuarta generación.

En Madagascar

• Artículo 46

Los candidatos a la Presidencia de la República deben:

- Tener nacionalidad malgache de origen;
- Estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos;
- Tener como mínimo cuarenta años cumplidos en la fecha de presentación de la candidatura.

El Presidente de la República en funciones debe dimitir el día antes del inicio de la campaña electoral si desea presentar su candidatura.

En Malí

• Artículo 31

Los candidatos a la Presidencia de la República deben:

- Tener la nacionalidad maliense de origen;
- Estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos.

En Níger

• Artículo 37

Puede postular a la Presidencia de la República:

- Toda persona de nacionalidad nigerina de origen;
- Que tenga cuarenta años cumplidos y esté en posesión de todos sus derechos civiles y políticos.

La ley precisa las condiciones de elegibilidad y de presentación de las candidaturas, etc.

En el Senegal

• Artículo 23

Los candidatos a la Presidencia de la República debe:

- Tener exclusivamente nacionalidad senegalesa;
- Estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos;
- Tener como mínimo treinta y cinco años.

En el Chad

• Artículo 62

Pueden presentar su candidatura a la Presidencia de la República los nacionales del Chad de ambos sexos que cumplan las siguientes condiciones:

- Haber nacido en el Chad;
- Ser nacido de padre y madre también originarios del Chad y no tener ninguna otra nacionalidad que no sea la del Chad.

En Túnez

• Artículo 40

Puede presentar su candidatura a la Presidencia de la República el tunecino que:

- No tenga ninguna otra nacionalidad;
- Sea de religión musulmana;
- Sea de padre, madre y abuelos por parte paterna y materna tunecinos, que hayan tenido todos, sin interrupción, la nacionalidad de Túnez;
- Tenga como mínimo cuarenta y como máximo setenta años y esté en posesión de todos sus derechos civiles y políticos.

Una vez indicado el contenido de estas constituciones, es preciso hacer algunas observaciones.

Es un principio recogido en las normas internacionales de derechos humanos que no toda distinción es discriminación (Tribunal Europeo de Derechos Humanos: decisión en el caso Van Der Muselle de 23 de noviembre de 1983, A 70, párrafo 46).

Por ello, sólo hay discriminación si la distinción no está justificada de manera objetiva y razonable entre personas en situación similar. La Misión no ha presentado pruebas en este sentido.

Además, según la jurisprudencia (véase la decisión de fecha 28 de noviembre de 1984 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Rasmussen, A 87, párrafo 40), la existencia de un denominador común en los sistemas jurídicos de los Estados miembros es una indicación de si esta diferencia de trato es razonable o no.

En las constituciones mencionadas, se observa que las condiciones para postular a la Presidencia estipuladas en el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen un denominador común. La Constitución de Côte d'Ivoire responde a este denominador común y no es discriminatoria, a menos que se considere que todas las demás constituciones lo son. Por otra parte, ¿acaso estas disposiciones de constituciones comparables han provocado guerras en esos países?

2. Causas olvidadas u omitidas

En el párrafo 10, la Misión enumera las cuestiones de derechos humanos que considera las raíces del conflicto. Pero su examen revela que estas cuestiones sólo guardan una relación indirecta con los derechos humanos. La Misión ha olvidado la verdadera cuestión de derechos humanos que es la raíz del conflicto:

a) La financiación de la rebelión

Ya nadie puede pensar seriamente que los rebeldes han financiado ellos mismos sus actividades de desestabilización.

- ¿Cómo es posible pensar que soldados que presuntamente están reclamando un sueldo puedan comprar armas que un Estado como Côte d'Ivoire no puede permitirse?
- ¿De dónde procede el dinero que cubre las necesidades de alimentación, logística y transporte de estas tropas?
- ¿Quién ha regalado tan generosamente los teléfonos celulares con que se pasean los rebeldes, pero que no pueden permitirse ni los trabajadores mejor pagados de Côte d'Ivoire?
- ¿De dónde sacan el combustible que hace funcionar sus vehículos desde hace cuatro años?
- En definitiva, ¿quiénes son los padrinos de la rebelión?

Estas son las preguntas que se imponen desde el inicio de la crisis de Côte d'Ivoire. ¿Por qué no han llamado la atención a los miembros de la Misión de las Naciones Unidas que, por su carácter imparcial, tenía el deber de investigar todas las causas del conflicto?

¡Todas las organizaciones y los países han condenado el intento de golpe de Estado!

¿Pueden condenarse las consecuencias sin investigar y condenar las causas y, en este caso, la financiación?

No hacerlo condena a perpetuar el conflicto en Côte d'Ivoire.

La financiación de una rebelión que siembra el crimen a su paso sólo puede ser obra de una organización criminal. ¿Cómo puede pasarlo por alto la Misión de las Naciones Unidas? ¿Acaso ha olvidado que, en la resolución 49/159 de fecha 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó que la delincuencia organizada representa un gran peligro para el desarrollo de los Estados, la calidad de la vida, los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que utiliza su poder financiero para corromper a las instituciones políticas, económicas y sociales?

¿Debemos dar crédito a ciertas teorías, como las de Yves Ekoue Amaïzo que opina, en un artículo sobre las causas de la parálisis del poder de Côte d'Ivoire, en *Le Monde Diplomatique* de enero de 2003, que la liberalización y la transparencia por la que abogan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están superadas por la capacidad de influencia de ciertas oligarquías financieras del sector privado que ya no vacilan en atenuar a los gobiernos, tanto del sur como del norte, y a veces por el daño que causan.

En resumidas cuentas, cabe preguntarse por qué la Misión enviada a Bouaké no ha preguntado a los rebeldes de dónde salen sus medios de subsistencia y los fondos que han utilizado para obtener armas.

b) Acerca de la injerencia externa

En el artículo 23 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se establece que los pueblos tienen derecho a la paz y la seguridad, tanto a escala nacional como internacional. El principio de solidaridad y de relaciones de amistad afirmado implícitamente en la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmado en la de la Organización de la Unidad Africana, es aplicable a las relaciones entre los Estados.

En el párrafo 2 de ese mismo artículo se declara que, a fin de cimentar la paz, la solidaridad y las relaciones de amistad, los Estados Partes en la Carta se comprometen a prohibir que sus territorios se utilicen como punto de partida para actividades subversivas o terroristas contra los pueblos de cualquier otro Estado Parte en la carta.

Es sorprendente que la Misión de las Naciones Unidas no se haya planteado la injerencia externa como cuestión de derechos humanos que está en los orígenes del conflicto y, sin embargo, en las convenciones internacionales se considera que esta injerencia constituye una violación de los derechos humanos.

¿Cómo puede la Misión de las Naciones Unidas, que declara que su objetivo es reunir información que pueda ayudar al Consejo de Seguridad a entender lo que pasa sobre el terreno y contribuir a la búsqueda de la paz, omitir toda referencia a la injerencia externa?

¿Cómo puede el Consejo de Seguridad entender la situación sobre el terreno si la Misión no ha tratado de darle información, habiendo declarado el 16 de diciembre de 2002 en el diario *La Croix* el Sr. Dominique Galouzeau de Villepin, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, país con el que Côte d'Ivoire ha firmado acuerdos en materia de defensa: "Denunciamos las injerencias externas, es decir, todo acto que parta de los Estados vecinos de Côte d'Ivoire, tal como la entrega de armas o el envío de hombres. Y sacaremos todas las conclusiones del caso".

Cabe preguntarse, cómo puede la Misión cerrar los ojos cuando el Sr. Kansteiner, Subsecretario de Estado a cargo de Asuntos Africanos declaraba el 12 de febrero de 2003 a los miembros de la Comisión de Asuntos Africanos de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos: "Incluso si estos dos Presidentes niegan los hechos, sabemos que varios rebeldes provienen de Burkina Faso. Su organización, el grado de coordinación de su plan de guerra y las armas de que disponen ponen claramente de manifiesto que cuentan con asistencia extranjera".

A pesar de todas las pruebas, la Misión no cree que se trate de una cuestión de derechos humanos que esté en los orígenes del conflicto. ¿Piensa acaso que contribuirá de este modo a la paz?

C. Parcialidad en la presentación de las partes

1. Desequilibrio en el espacio otorgado a los argumentos de cada parte

La Misión, según su metodología implícita, da la palabra a las distintas partes. También ahí los desequilibrios muestran sus prejuicios.

- A partir del párrafo 68, que forma parte de una sección relativa a las fosas comunes, el informe recoge la opinión del Sr. Guillaume Soro en nueve párrafos (68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 77). Aparte de lo que dictan las normas de cortesía, el Gobierno no ha disfrutado de tanta atención por parte de la Misión, ni ha tenido una auténtica sesión de trabajo con ella. Este informe parece servir de tribuna al MPCÍ. De los 15 párrafos (68 a 82) que se supone tratan de las fosas comunes de Bouaké, solamente cuatro se refieren a lo que podría considerarse el objetivo de la Misión y el resto son un alegato a favor del MPCÍ.

En cuanto a las detenciones y arrestos, el informe cita los nombres de cinco personas supuestamente detenidas en la Dirección de vigilancia del territorio (párrafo 85). Paradójicamente, cuando habla de las personas detenidas por el MPCÍ, no cita sus nombres.

Ahora bien, durante su Misión en Ginebra, los días 19 y 20 de diciembre de 2002, la Ministra delegada de derechos humanos incluyó en forma de anexos a la declaración solemne del Gobierno testimonios que incluían los nombres de militares y gendarmes detenidos por los rebeldes.

El Director del Gabinete de la Ministra delegada de derechos humanos remitió a la Misión en Abidján otro ejemplar de este documento acompañado de un CD-ROM con instructivas imágenes de violaciones flagrantes de los derechos humanos por parte de los rebeldes. ¿Por qué esta discriminación? Los miembros de la Misión no han planteado a los rebeldes ninguna pregunta concreta sobre este punto.

Por otra parte, si hubiera leído los testimonios, sabría que el citado Mamadou Cissé, primer teniente alcalde del Partido Alianza de los Republicanos de Vavoua,

ciudad en manos de los rebeldes, cuyo arresto arbitrario denuncia, fue acusado por B.T.A. (testimonio No. 01 del documento antes citado) de ofrecer armas a la comunidad burkinabé para participar en el conflicto.

2. Presentación de los rebeldes desde una perspectiva favorable

Con frecuencia se presenta insidiosamente a los rebeldes desde un punto de vista favorable.

- En el párrafo 35 se deslizó una frase surrealista: “Pese a las medidas adoptadas por los dirigentes del MPCCI, proliferaban los hurtos”. ¿A qué medidas se refieren? ¿A la ejecución sin juicio de los presuntos ladrones?⁵

¿Cómo se puede hablar de medidas para evitar los hurtos cuando hay quienes abren las cárceles allá donde van y enrolan a algunos de los presos para que combatan a su lado?

Por lo que sabemos, la cárcel se ideó para impedir la impunidad. ¿Cómo una Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que sabe que la Organización mundial se ha pronunciado por la lucha contra la impunidad, puede hablar de medidas tomadas por un grupo que pisotea este principio? Y la Misión parece justificarlo diciendo que se debe a que el MPCCI no tiene administración. ¿Entonces por qué este grupo ha tomado la iniciativa de desencadenar una guerra? ¿Se han tenido en cuenta las víctimas de las infracciones cuyos autores han sido puestos en libertad de esta manera?

- En el párrafo 52, en relación con los asesinatos del Ministro Emile Boga Doudou y de los coroneles Loula Dagnou, Oblé Dally y Yodé, la Misión sugiere la posibilidad de que no hayan sido cometidos por el MPCCI, e imputa dicha duda al Gobierno. Así, abre la vía a otra línea de investigación de los autores de dichos asesinatos. Quizá la Misión pretenda que el Gobierno se considere a sí mismo autor de estos hechos. Aunque en realidad, desde los primeros días de la crisis, el Presidente de la República ha acusado claramente a los rebeldes de ser los autores de estas masacres.
- La Misión ha optado por incluir en el informe afirmaciones de ciertas organizaciones de derechos humanos, cuyos nombres no cita y que tienen como denominador común el deseo de atenuar los crímenes de los rebeldes. En el párrafo 50, cierta organización precisa el número de ejecuciones presuntamente cometidas en zonas controladas por el Gobierno, que serían 150.

Pero cuando se trata de ejecuciones sumarias cometidas por los rebeldes, de repente es imposible dar una cifra. Además, se afirma que los rebeldes llevaron a cabo esas ejecuciones especialmente al iniciarse el conflicto.

Es una injuria a la memoria de las innumerables víctimas que murieron mucho tiempo después del principio del conflicto, el testimonio de cuyos familiares se incluye en el informe remitido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra y a la Misión cuando llegó a Abidján.

⁵ Una comunicación de la Agencia France Presse de 7 de octubre de 2002 describe la ejecución de un ladrón con los siguientes términos: “en el punto de reunión de los rebeldes, un hombre con bolsas y un ventilador es escoltado por un soldado. De repente, con una ráfaga, el hombre es ejecutado a sangre fría. ‘Es un ladrón’, explica simplemente un rebelde con la cara marcada de metralla”.

- En el párrafo 84, una organización de derechos humanos (¿la misma?) calculó que los agentes del orden del Gobierno habían detenido a 150 personas entre septiembre y diciembre de 2002. También en este caso se afirma desconocer el número de personas detenidas por los rebeldes.
- En el párrafo 121, el informe indica claramente que en Bouaké no se ha denunciado ningún acto de destrucción de instalaciones públicas ni privadas.

Esta afirmación carece de imparcialidad y demuestra igualmente la falta de seriedad en el trabajo efectuado, pues en Bouaké sí que se han destruido bienes públicos y privados.

En lo que respecta a los bienes públicos:

- El primer día los rebeldes quemaron y saquearon la Prefectura de Policía.
- Rompieron las puertas de las oficinas del Juzgado y se llevaron los sellos.
- Se produjeron actos de pillaje y saqueo en los locales de la Subprefectura y de la Prefectura, en todas las comisarías de policía y en los campus universitarios.

En cuanto a los bienes privados, los rebeldes saquearon numerosas casas pertenecientes a particulares y se llevaron vehículos privados.

Numerosos testimonios recogidos por la Ministra delegada de derechos humanos entre desplazados de Bouaké confirman estos hechos. Los ejemplos más patente son el saqueo del domicilio de un empresario de Bouaké, Sr. Konan N'zi Kan Kouame, y los daños provocados a más de 70 vehículos de transporte.

- En el párrafo 125 de su informe la Misión afirma que “desde la llegada de las fuerzas francesas a la localidad, se ha observado que los combatientes del MPCCI hacen lo posible por evitar los saqueos”.

Las observaciones anteriores relativas al párrafo 87 también son válidas en este caso.

Por otra parte, cuando la Misión emplea la expresión “se ha observado” se comporta como testigo ocular de los presuntos intentos del MPCCI para evitar actos de saqueo, cuando solamente permaneció durante un día en Bouaké en el mes de diciembre de 2002.

3. Presentación del Gobierno desde una perspectiva desfavorable

En general, cuando la Misión informa de las explicaciones del Gobierno se esfuerza por dejar claro que no emite ningún juicio de valor sobre su veracidad (párrafo 64) como para arrojar una sombra de sospecha sobre los dirigentes de Côte d'Ivoire.

a) Sobre las fosas comunes

- En el párrafo 60, la Misión se refiere a la fosa común de Monoko-Zohi y precisa que esta zona controlada por los rebeldes está situada en la parte occidental del país.

La Misión no extrae ninguna consecuencia de la localización geográfica de esta fosa común. Por lo demás, no hace referencia a las constataciones incluidas en el informe, así como en los informes que el Ministerio delegado de derechos

humanos le hizo llegar a Abidján y a Ginebra. Ciertamente, se habría visto obligada a admitir que para ir a Monoko-Zohi (Subprefectura de Dania), había que pasar obligatoriamente por Zaïbo, donde están estacionadas las fuerzas francesas. ¿Pueden decir las fuerzas francesas que han visto pasar a las fuerzas de Côte d'Ivoire? La Misión tenía plenas facultades para preguntárselo. Estos son los hechos y el objetivo de la Misión era esclarecerlos.

b) Sobre las denuncias de abusos y amenazas

- En el párrafo 66, dice “La Misión preguntó a los dirigentes militares del Gobierno si se había hecho comparecer a alguien ante la justicia por haber cometido abusos”. Aquí no hay ninguna indicación de presunción. ¿Considera la Misión que las fuerzas gubernamentales han cometido abusos?

¿De qué abuso habla para formular esta condena sin apelación y sin respeto a la presunción de inocencia? ¿Pretende insinuar que las fuerzas del Gobierno cultivan la impunidad?

Además, es poco creíble que un dirigente del Gobierno haya dado oficialmente tal información concluyente. ¿No tiene la utilización del término “dirigente” sin que se identifique a la persona la intención de dar crédito a este testimonio ambiguo?

- En los párrafos 107 y 108 se dice que los periodistas de Côte d'Ivoire, sobre todo los simpatizantes de los partidos de la oposición, son objeto de actos de violencia, presiones y amenazas de muerte y que dichos actos podrían ser obra de las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire. Sin embargo, en la enumeración de estos actos, la Misión fue incapaz de demostrar que fueran imputables a las fuerzas de seguridad.

Es más, suponiendo que las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire, y por tanto agentes gubernamentales, hubieran llevado a cabo estos actos, es incomprensible que también se hayan perpetrado contra dos periódicos cercanos al poder (*Notre Voie* y *Actuel*), como bien cita el informe.

Por otro lado, la Misión, al igual que “Reporteros sin Fronteras” hace unos meses, curiosamente omitió mencionar que el 19 de septiembre, el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2002, la emisora de Abobo Abidján de la televisión de Côte d'Ivoire fue atacada y sufrió daños. Igualmente, las emisoras de Séguéla y Namgbo (situadas en el norte del país) y de Bouaké sufrieron ataques de manera que, al día de hoy, la radio y la televisión nacionales ya no emiten en las zonas controladas por los rebeldes. Además, éstos utilizan lo que queda de las instalaciones para divulgar sus mensajes y propaganda.

¿Se explican estas omisiones porque es impensable imputar estos actos de sabotaje al Gobierno?

- En el párrafo 112, el informe menciona que desde el comienzo de la crisis se han producido asesinatos políticos y cita en particular la muerte del General Robert Guéï como caso típico. Hay que remarcar que, en la situación actual, cuando todavía no se han elucidado las circunstancias de su muerte, es peligroso afirmar que se trata de un asesinato político.

c) Sobre la destrucción de barrios de viviendas precarias

Esta falta de imparcialidad en el examen de los hechos también se deja ver en la interpretación tendenciosa y falsamente compasiva de la destrucción de barrios de viviendas precarias.

Está claro que se han destruido barrios de viviendas precarias. Tampoco se discute que una política destinada a una urbanización racional debe tener por objetivo el desplazamiento de los habitantes de estos lugares y la destrucción de sus construcciones. Pero estos actos pueden anticiparse por motivos de seguridad.

La Misión se arroga el derecho de juzgar a las Autoridades de Côte d'Ivoire en los siguientes términos: "La cuestión plantea grandes problemas de conciencia. Resulta difícil justificar la destrucción deliberada de viviendas en las que residen y habitan seres humanos".

Quienes abruman a Côte d'Ivoire sobre esta cuestión no tienen el monopolio de la sensibilidad y la compasión.

¿Desea discutir la Misión que quienes atacaron a Côte d'Ivoire proceden de ciertos barrios de viviendas precarias? Así, la destrucción de dichos barrios era una cuestión de necesidad. Hay que plantear una pregunta a la Misión: entre la vida humana y los bienes materiales ¿qué valor debe prevalecer? La población de Côte d'Ivoire considera que la vida vale más que los bienes.

Quienes nos acusan no han experimentado la misma indignación ante el dolor de las mujeres violadas y los familiares de las personas asesinadas de que se habla en el informe que se les envió. ¿Han sentido indignación por la suerte de las personas que debieron huir de Bouaké?

El auténtico problema reside en la ausencia de aviso previo y las cuestiones vinculadas al realojo. El Gobierno expresó su compasión hacia los habitantes de estos barrios. Varios ministros los han visitado. Se ha previsto y programado una política de realojo. Se ha acogido a muchos de ellos en centros pertenecientes al Gobierno. ¿Dónde está la falta de conciencia?

Una vez más, quienes nos acusan no tienen el monopolio de la sensibilidad. Deberían preocuparse más bien de ayudar a que estas personas tengan suficientes recursos para abandonar estos barrios y habitar en residencias lujosas como las suyas.

No se trata de mantener a estas personas en los barrios de viviendas precarias. Ésta era la política del Gobierno cuando se le impuso la guerra. Así, una solución duradera para los barrios de viviendas precarias consistiría para quienes nos acusan en hacer que los rebeldes depongan las armas.

d) Grandes omisiones

- En los párrafos 22 y 23, la Misión indica que existe una importante corriente de personas desplazadas en el interior del país. No obstante, omite especificar en qué sentido se dirigen dichos desplazamientos, a saber, de norte a sur.

Esta información nos parece esencial.

e) Sobre los medios de información

El informe tiende a hacer creer, de manera insidiosa, que el Presidente de la República reconoce que estos periódicos incitan al odio. ¿En qué se basa para decir que, cuando el Presidente de la República pide que no se ataque a los extranjeros, se dirige en particular a los diarios *Notre Voie*, *Le National* y *Fraternité Matin*?

A este respecto, hay que decir unas palabras sobre las acusaciones contra el diario “Le National”, concretamente las relativas a la publicación de comentarios racistas contra la comunidad musulmana y los homosexuales.

La Misión transmite la sensación, compartida por muchos habitantes de Côte d’Ivoire, de que el discurso sobre los derechos humanos constituye un instrumento esencial de la guerra impuesta al país que tiene como dispositivo esencial la instrumentalización de la Corte Penal Internacional.

En efecto, *Le National*, presentado por la Misión como un diario tribal, xenófobo y racista, está considerado, junto con otros diarios, portavoz del partido en el poder. Todas las acusaciones contra este diario son acusaciones contra el partido del Gobierno.

La Misión insinúa que este diario representa la ideología de la extrema derecha. Ahora bien, la extrema derecha, que ciertamente no es recomendable por su nacionalismo desmedido, se caracteriza por sus prácticas de discriminación y recomienda la exclusión o incluso el aniquilamiento de personas consideradas marginales, como los homosexuales. De ahí la necesidad de procesar a *Le National* en la Corte Penal Internacional, al igual que a ciertos miembros del Ejecutivo de Côte d’Ivoire del cual se consideran heraldos.

Así se aclara la afirmación incluida en el informe según la cual *Le National* es conocido por sus posturas radicales y sus artículos de carácter xenófobo. “El diario publica comentarios racistas que atentan contra la comunidad musulmana y los homosexuales”. La ligereza de esta afirmación se puede ilustrar ya por la constatación de que el diario *Le National* nunca ha incorporado en su línea editorial la lucha contra la homosexualidad, fenómeno por otra parte poco conocido en Côte d’Ivoire (en comparación con Europa y América).

D. Revelaciones del informe

- El párrafo 145 del informe se refiere a Côte d’Ivoire como: “un país próspero, de una hospitalidad legendaria, debe hacer frente hoy a la situación planteada por el sector de su población constituido por los inmigrantes y sus descendientes, y a las consecuencias de sus simpatías políticas”.

El informe nos indica que los inmigrantes de Côte d’Ivoire tienen simpatías políticas. ¿Cuáles son estas simpatías? Sería bueno que la Misión nos lo dijera. ¿Quiere insinuar que los extranjeros se han inmiscuido en la política de Côte d’Ivoire? ¿En beneficio de qué agrupación política lo han hecho?

La Misión parece decir que la guerra se ha hecho para los extranjeros y, ciertamente, por algunos de ellos.

E. Sobre los Responsables de los “Escuadrones de la Muerte”

1. La transgresión del principio de la presunción de inocencia

- A partir del párrafo 55, se habla de asesinatos organizados por escuadrones de la muerte y milicias privadas.

El Gobierno constata que se han cometido crímenes en las zonas libres.

En una declaración televisada del 8 de noviembre de 2002, el Gobierno, por intermedio de la Ministra delegada para los derechos humanos, condenó los crímenes y presentó sus condolencias a las familias enlutadas. El mismo día, el Gobierno organizó una reunión de trabajo con el Jefe del Estado Mayor, el Comandante Superior de la Gendarmería y el Director General de la Policía Nacional, que acompañaban a sus colaboradores más cercanos, para reforzar la seguridad y obligar a las fuerzas del orden y de defensa a buscar a los autores de esos crímenes, a fin de hacerlos comparecer ante los tribunales. En la misma declaración, el Gobierno, además de recordar que sus miembros no podían aceptar esos crímenes por convicciones personales, invitaba también a la comunidad internacional a enviar una comisión de investigación a Côte d'Ivoire.

Según el informe “la Misión ha recogido informaciones en que se puntualiza que los escuadrones de la muerte están integrados por elementos próximos al Gobierno, la guardia presidencial y una milicia tribal de la etnia del Presidente. Se han mencionado algunos nombres”.

La gravedad de esas declaraciones no debe pasar desapercibida por quedar comprendida entre afirmaciones de carácter general.

No hay que dar otro sentido a estas palabras: la Misión de las Naciones Unidas imputa la responsabilidad de crímenes cometidos por los llamados escuadrones de la muerte al Gobierno de la República de Côte d'Ivoire y a su Presidente por los siguientes motivos:

- En primer lugar, no hay que dejarse abusar por el empleo del condicional. Ese modo gramatical presenta los hechos como una eventualidad. La Misión habla de “informaciones” recogidas. No indica la fuente, a diferencia de otras partes en que cita a organizaciones de defensa de los derechos humanos, partidos políticos o rebeldes.
- En el párrafo 59, sin embargo, dice que las Fuerzas Armadas Nacionales de Côte d'Ivoire son las que han declarado que el MPCÍ ha confeccionado una lista de personas a las que se ha de ejecutar, dando así la impresión de que hace suya esta información y le da más crédito que a las demás. En este caso no aparece la famosa cláusula del tipo: *“el hecho de que se citen estos fragmentos del documento no entraña un juicio de valor por parte de la Misión”* (párr. 41).

En cuanto a la imputabilidad de los escuadrones de la muerte, a pesar de la gravedad de las “informaciones”, no tiene la prudencia elemental de la misma reserva. En otras palabras, podría decirse: Aceptad con reservas todo lo que dice el Gobierno pero cuando eso se ponga en duda, asumid que es cierto.

Además, la expresión “en que se puntualiza” después de “informaciones” deja claro cuál es el propósito de los autores del informe. Se supone que la puntualización admite la certeza y da a lo que se concibe el carácter de existente. Así pues, no es sorprendente que la Misión de las Naciones Unidas sepa nombres. La Misión, que se preocupa por luchar contra la impunidad, no se toma la molestia de comunicar esos nombres a las autoridades para que se entablen procesos judiciales contra esos delincuentes.

La Misión sabe que se han entablado procesos judiciales contra personas desconocidas, como demuestra el Acta No. 942 de 11 de noviembre de 2002 de la brigada de investigaciones a la que se confió el expediente que el 20 de diciembre de 2002 el ministro delegado para los derechos humanos entregó al Alto Comisionado Adjunto en Ginebra.

¿Qué le preocupa a la Misión: la lucha contra la impunidad o la explotación política de alegaciones a las que se califica de informaciones?

En realidad, la única persona identificable, considerando a todo designado como culpable, es el Presidente de la República, no sólo en calidad de jefe del Gobierno, sino también en calidad de miembro de una etnia que ha generado una milicia tribal.

Se trata de una violación insidiosa pero incontestable del principio de la presunción de inocencia, más inaceptable aun cuando emana de un organismo que se supone que le debe proteger. Este principio está universalmente reconocido y confirmado por el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Está reconocido que esta presunción también se aplica a la fase previa al proceso penal. Existe una jurisprudencia constante a ese respecto en los órganos jurisdiccionales del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como muestra el fallo en la causa *Allenet de Ribemont* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de febrero de 1995 en los párrafos 35 y siguientes: “... el campo de aplicación del artículo 6.2º no se limita a la hipótesis presentada por el Gobierno. En efecto, el Tribunal constató una violación de esa disposición en los casos *Minnelli y Sekanina* (...) si bien las jurisdicciones nacionales encargadas habían archivado las diligencias por motivo de prescripción en la primera y habían absuelto al interesado en la segunda”. Asimismo el Tribunal admitió la aplicabilidad en otros casos en los que las jurisdicciones nacionales no estaban llamadas a decidir sobre la culpabilidad⁶.

Así, la presunción de inocencia debe respetarse, incluso antes de un proceso.

El empleo del condicional no excluye que se tipifique la violación de la presunción de inocencia. En un caso *X* contra Austria, la Comisión Europea de Derechos Humanos lo ha admitido en estos términos: “tomados aisladamente los términos, se deduce de la investigación que, con casi toda probabilidad, el bebé habría sido asesinado por su abuela de sesenta y ocho años, se acercan a una afirmación de culpabilidad de la solicitante y a ese efecto, son criticables. Una fórmula más neutra habría podido satisfacer la necesidad de información del público”.

⁶ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia *Adolf* de 26 de marzo de 1982, sentencias *Lutz*, *Engiert* y *Nölkenbockhoff* de 25 de agosto de 1987.

No es decisivo que la Misión de las Naciones Unidas pueda objetar que no ha hecho más que exponer sospechas porque, una vez más, como declaró J. A. Frowein en un comentario del caso Petra Kruise contra Suiza ante la Comisión Europea de Derechos Humanos⁷: “la expresión de sospecha puede tener una incidencia a nivel de proceso, si dicha expresión tiene el objetivo de desencadenar una campaña de prensa o de influenciar a los jueces⁸”.

En este caso, el informe de las Naciones Unidas ha desencadenado una campaña de prensa precedida por claras señales que figuran en la entrevista al Presidente Burkinabé. Los periódicos *La Croix* y *Le Monde* han nombrado a su culpable basándose en ese informe.

El informe también pretende, implícitamente, justificar las diligencias judiciales e influir en los jueces que se encargarán de éstas ya que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos no deja de declarar que los responsables de dichas exacciones serán procesados por la Corte Penal Internacional.

En resumen, la violación del principio de la presunción de inocencia está más que demostrada en este caso.

En realidad, esta acusación debe incluirse en el expediente de la campaña internacional contra Côte d’Ivoire que apunta a legitimar la toma de poder por las armas haciendo pasar a las víctimas por verdugos.

Es lamentable que la Corte Penal Internacional, en la que se han depositado grandes esperanzas, pueda considerarse un arma de guerra igual que los carros de combate, los Kalashnikov, al servicio de una rebelión que todavía no se sabe quién financia.

2. Algunas consideraciones relativas a las acusaciones contra el Gobierno

A pesar de la falta de pruebas presentadas para corroborar las alegaciones relativas a los escuadrones de la muerte, se imponen algunas consideraciones relativas a las acusaciones formuladas contra el Presidente de la República y el Gobierno.

a) Sobre la ausencia de móvil

A menos que alguien tenga sus facultades mentales perturbadas, no hay crimen sin móvil. El móvil es la razón que ha llevado al individuo a cometer una infracción.

¿Cuales serán los móviles del Gobierno de Côte d’Ivoire para cometer esos crímenes? ¿La amenaza, la venganza, la envidia?

A partir de la inanidad de esas acusaciones puede realizarse un examen rápido de la personalidad de las personas asesinadas:

- Emile Tehe, Presidente del Movimiento Popular de Côte d’Ivoire, cobardemente asesinado el 2 de noviembre de 2002, no representaba peligro alguno para el poder. Muchos habitantes de Côte d’Ivoire prácticamente no habían oído hablar de él hasta que fue asesinado.

⁷ Requerimiento No. 9077/80, decisión de 6 de octubre de 1881: D.R. 26; págs. 213 y 214. Requerimiento No. 7988/77, decisión de 3 de octubre de 1978.

⁸ Citado por Dean Spielman “procès équitable et présomption d’innocence” (proceso equitativo y presunción de inocencia), *Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme*, 1999, pág. 669.

- Philippe Mohamed Rady, empresario, no preocupaba en absoluto al poder. El Jefe de Estado de Côte d'Ivoire no es un hombre de negocios y no deja de decirles a éstos que no es su competidor. ¿Qué interés podría haber en asesinar a este comerciante próspero?
- El Dr. Benoit Dacoury-Tabley cuya detención durante dos días por las fuerzas de seguridad de Côte d'Ivoire no ha quedado probada, no suponía amenaza alguna para el Gobierno.

¿Tenía armas? ¿Era un estratega militar? No hay pruebas a ese respecto que justifiquen que precisamente él era el objetivo, y no otros miembros de su familia. Los miembros de la familia Dacoury-Tabley lo vieron tan claro que, en una declaración leída por Philippe Henri Dacoury-Tabley, afirmaron que los verdaderos responsables de la muerte de su hermano eran los que habían declarado esta guerra.

- ¿Representaban Yerefe Camara, Souleymane Coulibaly y Soualiho Diomandé un peligro para el poder? En caso afirmativo, ¿cuál?

En todos esos crímenes, ¿es admisible imputar el móvil de la venganza a las autoridades más importantes de Côte d'Ivoire?

Si se considera que las autoridades tienen previsto vengarse actuando así, hay que concluir que todos aquellos sospechosos de participar en la rebelión como autores o cómplices habrían sido ejecutados sistemáticamente. Si eso fuera cierto, ¿cómo explicar que se hayan entablado procesos ante órganos judiciales de instrucción contra las personas sospechosas de participar en la rebelión y de haber participado en el atentado contra la seguridad del Estado?

En efecto, desde el 14 de octubre de 2002, en el marco de la guerra en curso:

- Veintitrés personas han sido acusadas en la octava sala de instrucción del Tribunal de Abidján por los delitos de atentado contra la autoridad del Estado, participación en una banda armada y asociación delictiva.
- Veinticinco personas han sido acusadas en la décima sala de instrucción. La lista de todas las personas ha sido comunicada a la Misión de las Naciones Unidas.

¿Por qué un Estado que ejecuta somera y clandestinamente a sus opositores entablaría, además, procesos judiciales en su contra?

¿Por qué elegiría ese poder ser civilizado para unos y salvaje para otros?

b) ¿Quién se beneficia de los crímenes?

Un poder político sensato, e incluso el más maquiavélico, no hace nada que no le aporte beneficios. En este conflicto, el Gobierno de Côte d'Ivoire ha optado por la paz y ha hecho muchos sacrificios para sentarse en la misma mesa que los rebeldes que, cabe recordarlo, fueron solemnemente condenados el 31 de octubre de 2002 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La opción que ha elegido le dicta una conducta que muestra que esos crímenes no le aportan nada.

Se constata que cada vez que la coyuntura es favorable a la paz o al poder reinante, se produce un crimen de una personalidad pública o de alguno de sus familiares:

- La muerte del Dr. Benoit Dacoury-Tabley se produjo el 8 de noviembre de 2002, al día siguiente de la firma en Lomé (Togo) de un acuerdo entre los rebeldes y el Gobierno que reconocía el respeto de la legalidad constitucional, las instituciones y la integridad territorial y antes de la firma de un segundo acuerdo sobre las modalidades de desarme de los rebeldes que debía poner término a la guerra.

¿Qué más puede esperarse de un gobierno legal si se estima que su única preocupación es mantenerse en el poder?

¿Cabe sostener razonablemente que el Gobierno podía ordenar el asesinato del hermano de uno de los jefes rebeldes en ese momento?

Se puede concluir que ese crimen puede beneficiar a todos, excepto a las autoridades de Côte d'Ivoire.

Además, los rebeldes aprovecharon para suspender las negociaciones.

La familia Dacoury-Tabley, en su comunicado, que curiosamente fue silenciado por la prensa internacional, declaró que no desearía que la muerte de su hijo fuera explotada para fines políticos ni fuera un pretexto para finalizar las negociaciones.

- La muerte del comediante Yéréfé Camara, llamado "H", se produjo el 2 de febrero de 2003, al día siguiente de una manifestación histórica de apoyo al poder establecido que congregó a millones de personas, entre ellos numerosos extranjeros, sobre todo europeos, libaneses y poblaciones de África occidental.

Por primera vez, los medios de comunicación internacionales tuvieron que reconocer el carácter gigantesco e impresionante de ese apoyo al Gobierno y al Presidente de la República.

La propaganda de odio contra Côte d'Ivoire acababa de sufrir un golpe. Se nos tiene que decir si en ese momento preciso el Gobierno tenía algún interés en ordenar la muerte del célebre comediante "H" sabiendo que ello podía empañar su imagen en el extranjero.

Ni siquiera la dictadura más inteligente lo haría.

Este crimen fue perpetrado con el objetivo de borrar memorias: la gran manifestación que mostraba el carácter popular del régimen.

Así pues, tan sólo puede beneficiar a los enemigos del poder establecido.

En cuanto a lo que precede, numerosos ciudadanos de Côte d'Ivoire tienen miedo de que al día siguiente de que el Congreso de los Estados Unidos formule sus reservas a los acuerdos de Linas-Marcoussis, los escuadrones de la muerte vuelvan a atacar para desacreditar el régimen de Côte d'Ivoire y vuelvan a desviar la atención de la comunidad internacional de la condena a la toma del poder por las armas.

- Si el Gobierno es el culpable de los crímenes en cuestión, ¿cómo puede explicarse que el sindicalista Mahan Gahe, ardiente defensor de la legalidad constitucional cuya actividad era favorable al régimen en el poder, haya escapado a un atentado durante la noche del martes 11 al miércoles 12 de febrero de 2003? Unos individuos vestidos de militares y con armas de guerra irrumpieron en su domicilio en Anyama y tan sólo se dio cuenta cuando la alarma de su domicilio hizo huir a los asesinos.

c) Hechos cuestionables

El Gobierno de Côte d'Ivoire es objeto de continuas críticas. Si les son imputables los escuadrones de la muerte, a menos que se le rechace el beneficio de la inteligencia, hay que reconocer que, como criminal, es muy mediocre.

Los escuadrones de la muerte que la historia contemporánea conoce se caracterizan, en general, por su discreción, una de las condiciones de su eficacia. Las circunstancias de estos crímenes plantean algunas cuestiones:

- El cadáver del Dr. Dacoury-Tabley fue descubierto en un lugar de gran tránsito, al igual que el de Emile Tehe, que apareció en la autopista del norte.
- El cadáver de Yéréfé Camara, llamado “H”, fue descubierto por los militantes del RDR a las 5.00 de la madrugada en un barrio popular en el que vivirían numerosos militantes de ese partido.

A la luz de estas constataciones, se deduce claramente que esos crímenes se cometieron para que los cadáveres fueran vistos por el mayor número posible de personas. En otras palabras, la publicidad parece formar parte de la estrategia de esos asesinos, si no es su objetivo.

Un gobierno mínimamente inteligente no expondría así sus víctimas sabiendo que eso puede perjudicarle.

Conclusión

En las observaciones relativas a una comisión de investigación precedente de las Naciones Unidas sobre los acontecimientos de octubre y de diciembre de 2000 en Côte d'Ivoire, el Profesor René Degni-Segui⁹ termina diciendo que, en definitiva, la concepción apriorística y maniqueísta de la Comisión no lo lleva a buscar la **verdad**, objeto de la investigación, sino a defender una **causa**, la de un partido político. Por ese motivo plantea más problemas de los que resuelve. En lugar de hacernos avanzar, el carácter parcial y fragmentario del informe de la Comisión nos hace retroceder en el proceso de constatación de la verdad.

Esta conclusión sigue siendo plenamente pertinente respecto del informe de la Misión de determinación de los hechos que acaban de producirse en Côte d'Ivoire. En ese informe, Côte d'Ivoire constata con amargura que la Misión ha consagrado el hecho consumado del argumento de la fuerza a expensas de las exigencias de la democracia y de los derechos humanos.

Hay que temer que, persistiendo por esta vía, los agentes de las Naciones Unidas lleguen a conseguir, nada más ni nada menos que generar progresivamente en el seno de los pueblos un sentimiento de rechazo de la Organización mundial, lo que sería una catástrofe para la humanidad.

La Misión ha destacado que numerosos habitantes de Côte d'Ivoire tienen fe en la Organización mundial.

⁹ Ex Relator Especial de las Naciones Unidas para Rwanda.

Considerando lo que antecede, cuando llegue la comisión de investigación, reclamada desde hace mucho tiempo en nuestro país, ¿encontrará la fe en Côte d'Ivoire?

Hecho en Abidján, el 17 de febrero de 2003.
Por el Gobierno de la República de Côte d'Ivoire.

(*Firmado*) Victorine **Wodié**
Ministro delegado para los derechos humanos.

Anexo

El informe de la Misión de las Naciones Unidas peca por dos grandes inexactitudes en el párrafo 13:

- Primera inexactitud:

Se habla de la nueva Constitución de 2002. En realidad, la nueva Constitución de Côte d'Ivoire, que fue adoptada por vía de referéndum el 23 de julio de 2000 y fue promulgada el 1º de agosto de 2000, se titula:

Ley No. 2000-513, de 1º de agosto de 2000, relativa a la Constitución de la República de Côte d'Ivoire.

- Segunda inexactitud:

Según el informe de las Naciones Unidas, las últimas elecciones presidenciales que llevaron al Presidente Gbagbo al poder datan de 2002, con todas las insinuaciones que comporta dicha fecha.

Cabe afirmar enérgicamente que las últimas elecciones presidenciales fueron organizadas por la Junta militar, dirigida por el General Robert Guei, en 2000 y no en 2002. En esas elecciones, el Sr. Laurent Gbagbo, que no formaba parte del Gobierno, era candidato de la oposición, igual que los otros candidatos de los demás partidos de la oposición. Así pues, es lógico que no pudiera, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de la ley constitucional y manipular dicha ley para excluir a otros candidatos.
